

XXVII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES

Guanajuato 14-16 de noviembre de 2016

Tema: Género y elecciones

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

Brenda Fabiola Chávez Bermúdez
Doctora en Derecho
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Juárez del Estado de Durango
brendachbz@hotmail.com

Introducción

La democracia de un país se mide por la participación de toda la ciudadanía en los asuntos públicos, por tanto no debe limitarse únicamente a la participación en las urnas en los procesos de elección de representantes.

En la presente ponencia se analiza la necesaria adjetivación de la democracia, en virtud de la baja participación política que en la historia han tenido las mujeres, no sólo por el reconocimiento tardío de su derecho a votar y a ser votadas, sino por la estructura política y social –ante un arraigado patriarcalismo- que las ha excluido del ámbito público.

Por tanto, bajo el enfoque de la democracia paritaria, se examina la situación actual de la participación política de las mujeres y a través de los métodos inductivo y deductivo se determina, con base en los indicadores de organismos internacionales y las normas internacionales, qué pasa con el empoderamiento político femenino en el mundo, haciendo énfasis en el México actual, que de acuerdo con los datos obtenidos, si bien se reconoce un avance en materia política, en otros ámbitos la brecha de género sigue siendo amplia, pues en esos lugares donde las mujeres se posicionan aumentando las cifras en número, continúan los ejes pendientes en cuanto a liderazgo. Apreciándose en general un área de oportunidad para la sensibilización y una mayor cultura en perspectiva de género que

permita a las mujeres ejercer sus derechos políticos en las mismas condiciones que los varones.

La ponencia se estructura en cuatro subtemas, abordando en primer lugar la participación de las mujeres como fortaleza de la democracia y legitimidad de los gobiernos, bajo el rubro “La democracia en función de la participación de las mujeres”.

Enseguida se analizan los instrumentos internacionales más importantes, que entre países se han acordado para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres, recomendaciones de teóricas del feminismo y recomendaciones para la región Latinoamericana de parte de entidades internacionales como la ONU, todo ello en el tópico “Normas y estrategias para el empoderamiento político de las mujeres”.

En el subtema “El estado de las cosas. Panorama global sobre la participación política de las mujeres”, se analizan los estándares más importantes que organismos internacionales realizan para medir la desigualdad de género en diversos temas, pero predominando sobre la participación política.

Para finalizar, bajo el subtítulo “México, lo que es y lo que falta”, se pone de relieve la fuerza que le falta al país, al no contar con la participación de la mitad de la ciudadanía, lo que se ha avanzado en materia política respecto a la representación de las mujeres y lo que aún falta por construir.

La democracia en función de la participación de las mujeres

La participación de la ciudadanía en los asuntos fundamentales de un Estado es lo que da vida a la democracia moderna y constituye un elemento esencial para la legitimidad de los gobiernos.

La democracia fue adoptada en México como forma de gobierno por la Constitución de 1917 al determinar en el artículo 39 -el cual permanece inalterable desde la promulgación de la Carta Magna-, que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.

Una vez determinado el concepto de democracia constitucionalmente, es preciso demandar la calidad de la misma, pues es menester que cumpla las características de participación de toda la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos, la confianza en las instituciones estatales y un marco jurídico congruente.

En base a ello, la democracia como tal fue delineándose a partir del reconocimiento al derecho al voto femenino en 1953 para cumplir el objetivo de reconocer y brindar los canales adecuados para la participación de toda la ciudadanía, pues la Carta Magna original solo otorgaba ese derecho a varón, que ha tenido severos efectos en los derechos de las mujeres y en la participación plena de toda la ciudadanía en los asuntos del estado, pues como refiere Cobo (1999: 60):

El hecho de que el ciudadano en la constitución de la democracia moderna fuese un varón ha marcado poderosamente la noción de ciudadanía. La categoría de ciudadano está impregnada de fuertes sesgos patriarcales. Numerosos obstáculos y filtros muchas veces invisibles, hacen inviable dimensiones relevantes de la ciudadanía para las mujeres.

La participación ciudadana en los estados democráticos debe comprender no solo el derecho al voto, sino también el derecho a ser elegidos, a contar con alternativas para pronunciarse en las decisiones que les afecten, al hacerse efectivos los derechos humanos. Sin embargo, a más de 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino, sigue existiendo esa necesidad de la completa integración de la mitad de la población al ámbito público y del respeto a sus derechos básicos.

A partir de las exigencias de los movimientos feministas, de poner de manifiesto la exclusión de las mujeres al separar la esfera pública de la privada y crear un feminismo sólo apto para la maternidad, el cuidado de los hijos y las tareas del hogar, como base del patriarcado, se hizo necesario calificar con adjetivos a la democracia, pues su significado no es el mismo para los hombres que para las mujeres, al estar estas confinadas al ámbito privado.

En este sentido la democracia paritaria plantea la integración de mujeres y hombres en un plano de igualdad en la participación política y con el objetivo firme de eliminar la exclusión de las mujeres.

La democracia paritaria que adopta medidas afirmativas como las cuotas de género, se determina, por tanto, en base a la equidad, “porque a la hora de establecer la representación, tanto los ciudadanos como las ciudadanas constituyen las mitad hombres y la mitad mujeres en una sociedad, de modo que el interés o la representación debe tener una composición similar a la de la sociedad”. (Santín: 2011: 305)

Las cuotas de género establecidas como medidas afirmativas de carácter temporal para aumentar la participación política de las mujeres han sido adoptadas por muchos países con resultados positivos, cuyo objetivo final es lograr la igualdad y que una vez conseguida la meta desaparezcan como lo refiere su temporalidad.

En relación a ello, recientemente se promulgó la Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria, en el marco de la XXIX Asamblea General del Parlamento Latinoamericano, para mejorar la participación política de las mujeres en la región. En ella, se establecen como ejes rectores:

“a. Estado inclusivo y responsable con la Democracia Paritaria. b. Igualdad de trato y sin discriminación. c. Cultura paritaria, como superación de la cultura patriarcal, y la eliminación de estereotipos por razón de género. d. Libertad de acción y autonomía, que implica desterrar todo tipo de violencia, incluido el acoso político y la violencia política. e. Igualdad de Oportunidades y de Resultados, como culminación lógica de la igualdad sustantiva o de facto. f. Interculturalidad, a través del reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad étnica-cultural (en particular, poblaciones indígenas y afrodescendientes), institucional, religiosa y lingüística en condiciones de igualdad y respeto. g. Pluralismo político e ideológico. h. Transversalidad de género tanto en las instituciones públicas como privadas. i. Empoderamiento de las mujeres como toma de conciencia de las mujeres de sus derechos y de su ejercicio con autonomía y autodeterminación para tomar decisiones sobre su entorno.”

Normas y estrategias para el empoderamiento político de las mujeres

La baja participación de las mujeres en la política es producto de la discriminación producto de la cultura patriarcal, que como se dijo anteriormente, dividió a hombres y mujeres en esferas distintas, negándoles a ellas el desenvolvimiento en el ámbito público. Como cultura, esa discriminación se encuentra enraizada en todos los espacios de la vida social, por lo que es menester el establecimiento de acciones integrales que reviertan en cada uno de ellos, esa posición en desventaja que ostentan las mujeres.

Cobo (1999: 64) señala como estrategias para lograr un avance en el posicionamiento de las mujeres en la política, el establecimiento de mecanismos perceptivos y vinculantes de consulta a las mujeres en el caso de decisiones que les afecten específicamente. Mencionando también lo urgente que es la institucionalización de la figura del defensor o defensora de las mujeres, como sucede en Noruega, que atienda las reclamaciones de quienes se sienten discriminadas y asesore a la Administración y a las instituciones de representación del estado. Así como la institucionalización de una figura consultiva que pudiese aconsejar sobre las políticas de igualdad o bloquear los mensajes sexistas que tan habitualmente aparecen en los medios de comunicación.

En el ámbito internacional, las normas que específicamente refieren los derechos de mujeres, han hecho importantes pronunciamientos en lo que se refiere a los derechos políticos.

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, cuenta con carácter vinculante; mediante ella los Estados se comprometen a tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando el derecho a votar y ser elegibles para todos los organismos por elección pública, igual que para participar en la formulación de políticas gubernamentales y a participar en organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país (Art. 7). Lo mismo que para representar a su gobierno en el plano internacional.

Otra importante norma, la Convención Belém do Pará instituye entre los derechos reconocidos a las mujeres, el de igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

La Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria establece obligaciones del Estado con acciones concretas para cada poder, ejecutivo, legislativo, judicial y para los organismos de gestión electoral, en síntesis:

El **Poder Ejecutivo** deberá: tener una conformación paritaria de sus carteras ministeriales así como en los demás cargos directivos y en toda la administración de todos los niveles territoriales. Tener en todos los ámbitos del Estado, un reparto paritario en carteras ‘productivas o reproductivas’.

El **Poder Legislativo** adoptará: medidas tendientes a propiciar la democracia paritaria, tales como, a. La creación de una Comisión para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, con igual estructura, funciones, competencias y recursos propios que otras comisiones, orientada a promover proyectos legislativos con perspectiva de género y que impulse el efectivo cumplimiento de la Democracia Paritaria en todo el parlamento. b. La representación paritaria de la asamblea legislativa, de las presidencias de las comisiones legislativas, como al interior de ellas. c. La formación de una “bancada de mujeres” interpartidaria.

El **Poder Judicial** debería: a. Promover el acceso a la Justicia desde el respeto y garantía de la igualdad de género. El fortalecimiento del Estado de Derecho debe expandirse con recursos hacia el logro de la igualdad de género, ya sea a través de reformas legales específicas, asistencia jurídica direccionada, ventanillas únicas para reducir el abandono de casos en la cadena de justicia y la capacitación de jueces y juezas, fiscales y abogados, junto con el seguimiento de sus sentencias.

Los **organismos de gestión electoral** deberán: a. Garantizar su composición paritaria. b. Asegurar el cumplimiento efectivo de la paridad y medidas especiales de carácter temporal. c. Aplicar la justicia electoral desde el respeto al principio de igualdad sustantiva. d. Difundir la jurisprudencia y sentencias.

Asimismo en la Guía de Empoderamiento Político de las Mujeres 2014-2017, emitida por la ONU (2014:75), se establece un plan de acción regional para América Latina y el Caribe para *poner en*

marcha un paquete integral de medidas dirigido a modificar comportamientos que perpetúan la discriminación y la desigualdad, en la sociedad, en el sector público y en el sector privado. Esto a través de 5 objetivos estratégicos:

- Promover la democracia paritaria: medidas afirmativas.
- Integrar la perspectiva de género en políticas, acciones e instituciones
- Fortalecer liderazgos de mujeres.
- Promover partidos políticos que favorezcan la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres
- Combatir la discriminación, los estereotipos sexistas y la violencia.

Entre las acciones se incluye un Sistema regional de monitoreo sobre participación política en 18 países de la región; se destaca la acción para generar investigaciones, estudios, debates para prevenir y erradicar el acoso y violencia contra las mujeres en política; se contempla la generación de una masa crítica de mujeres a través del fortalecimiento de bancadas de legisladoras para promover los derechos de las mujeres; así como la promoción de investigaciones sobre el comportamiento de los medios con relación a las mujeres candidatas y electas y para generar herramientas para combatir la discriminación en los medios.

La Unión Interparlamentaria que documenta casos de éxito para aumentar la participación política femenina y el liderazgo en los parlamentos, refiere que la estrategia de otorgar un mayor porcentaje de financiación pública a los partidos que incluyan a mujeres en las listas de candidatos es muy efectiva para el empoderamiento político de las mujeres. Asimismo, sobre las reformas que propongan para la equidad de género las legisladoras, en referencia específica al caso de Mauricio, donde su Presidenta trabajó para establecer una coalición parlamentaria sobre igualdad de género, encargada de examinar la legislación y las políticas desde una perspectiva de género. Otra medida positiva es el apoyo que las organizaciones internacionales brinden a las mujeres líderes en política, así como la necesidad de que los medios de comunicación realicen una cobertura con sensibilidad de género, pues es lamentable la frecuencia de casos como ocurrió en Canadá en 2015, donde respecto a las líderes de partidos, el análisis se centró en su apariencia.

Se precisa encauzar mecanismos o instituciones jurídicas necesarios para asegurar al máximo una democracia paritaria, a fin de que no se deje a exclusiva voluntad de cada administración gubernamental la realización de los derechos civiles y políticos de las mujeres, esto a partir de la efectividad de que cada Estado brinde a base de políticas que promuevan y faciliten una mayor participación de las mujeres en ese ámbito, en sintonía con las cuatro prácticas fundamentales que para asegurar la efectiva participación política de la mujer, recomienda la Organización de las Naciones Unidas, a saber:

1. Asegurar que las elecciones, tanto locales como nacionales, sean imparciales y de libre acceso para las mujeres.
2. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil de mujeres a fin de promover los intereses de la mujer.
3. Fomentar en las instituciones públicas la rendición de cuentas en cuanto a la vigencia de los derechos de la mujer.
4. Apoyar a las mujeres líderes políticos a fin de ampliar su influencia.

El estado de las cosas. Panorama global sobre la participación política de las mujeres

La perspectiva actual sobre la integración de las mujeres al ámbito político sugiere una mejoría, pero no la igualdad total, pues ningún país ha cerrado la brecha de género total. En este tópico los países nórdicos han sido los más avanzados en cuanto a la integración de mujeres en este ámbito, que no es el único que se califica para determinar la igualdad de género, pues el ámbito laboral, educativo y de salud, también son indicadores de ello.

En la perspectiva anual de 2015, de acuerdo con la Unión Interparlamentaria, las mujeres ocuparon el 28,3% de los escaños en 28 países que utilizaron la cuota de género y en 30 países que no la utilizaron las mujeres representan el 13,5% de todos los parlamentarios.

En América Latina y el Caribe se aprecia un notable aumento de la participación en los parlamentos, al contarse con 27.2 puntos porcentuales en 2016 a diferencia de los 12.7 que se tenían en 1995. En esta región se sitúa el mayor logro. Se resalta el caso de México, que

gracias a la obligatoriedad de la paridad aumentó 5,6 puntos porcentuales, la participación femenina en la renovación de la integración de diputados en 2015.

Estos datos confirman que solo mediante mecanismos obligatorios de cuotas de género, se logra un avance en la participación política de las mujeres. Solo en el caso de Suriname se tuvo un avance positivo sin cuota de género, donde más de un tercio de los candidatos electorales eran mujeres, debido al trabajo de la Asamblea Nacional y de las organizaciones de la sociedad civil. O como en Europa, donde sucedió que el Partido Nacional Escocés ganó 56 escaños por primera vez e incluyó 20 para mujeres, aun cuando no se adoptó la cuota, pero demostró un compromiso con la equidad de género.

Sin embargo, los datos de la Unión Interparlamentaria muestran la dificultad con que se cuenta actualmente en muchos países para lograr la efectividad de los derechos políticos de las mujeres reconocidos en el plano internacional e interno, pues la violencia y la discriminación está presente en muchas de las elecciones suscitadas en 2015. En África, el promedio de participación femenina aumentó 0,7 puntos con una representación del 23,2%, pero ante los conflictos y la violencia, se dificulta el derecho de las mujeres no solo a ser elegidas sino a votar, como el caso del archipiélago de Zanzíbar, donde se documentó un aumento de divorcios en que las mujeres votaron en contra de los deseos del marido.

La discriminación es una constante en las candidatas, pues aunque hayan logrado la candidatura, ya sea por cuota, por promoción de los partidos políticos o de asociaciones civiles, ellas se enfrentan a duras críticas, a escasos financiamientos de campañas, señalamientos a su vida personal, o a su aspecto físico, que no ocurren entre los candidatos hombres. De acuerdo con estos datos que proporciona la Unión Interparlamentaria, se documenta que en Dinamarca la Primera Ministra fue atacada con calificativos despectivos (reina de hielo, fría y distante) y señalada por la ropa que vestía. En Portugal se les calificó de histéricas a las mujeres que lideraron un partido, e incluso “en los medios sociales se inició una campaña en la que se pedía a una candidata que posara desnuda en la portada de una revista”.

En el continente asiático, el sexismo tiñó las elecciones. En Myanmar se presentaron 800 candidatas, lo que resultó en un aumento de 9,5 puntos. Sin embargo, una vez ocupado su

puesto se “enfrentaron a discriminación y prejuicios, se organizaron equipos especiales para acosarlas y divulgar información falsa, además de que no todas las mujeres que fueron invitadas a presentarse a las elecciones aceptaron, debido a problemas familiares”. O como el caso extremo del asesinato de una mujer política de Afganistán.

La tabla de esta organización mundial de Parlamentos nacionales, con datos al 1° de agosto de 2016, sitúa a México en el lugar número 7, con un porcentaje de mujeres de 42.4 en la cámara baja y de 33.6% en la cámara alta o de senadores. La posición de México en esta tabla de la Unión Interparlamentaria ha mejorado mucho en este último proceso de elecciones, gracias a la obligatoriedad de la cuota de género 50/50 establecida por reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues en 2014, ocupaba el puesto 19 con 37.4 % de escaños ocupados por mujeres en la cámara baja del Congreso.

En referencia a otros parámetros, el Informe Global de la Brecha de Género en 2015, menciona que la brecha entre hombres y mujeres en salud, educación, oportunidades económicas y representación política se ha cerrado un 4 % en los últimos 10 años y de continuar la lentitud de los avances, se proyecta que el mundo tardará otros 118 años (hasta 2133) en cerrar la brecha económica por completo.

La brecha en empoderamiento político, el cuarto pilar medido por el Índice, es la más amplia. A nivel mundial, solo el 23 % de esta brecha de género se ha cerrado, pese a que esta área también ha experimentado los mayores avances, mejorando un 9 % frente al 14 % en 2006. Tan solo dos países han alcanzado la paridad parlamentaria y cuatro han alcanzado la paridad en cargos ministeriales. (Informe Mundial de la Brecha de Género, 2015)

En este Informe, se sitúan en los primeros lugares los países nórdicos, y es de resaltar el caso de Ruanda, situada en la posición 6 gracias a que ha rebasado el 50% de mujeres en el Parlamento. México ocupa la posición 71, si bien tiene un avance en la integración de mujeres en la legislatura en 2015, aún tiene muchas áreas pendientes en igualdad en el ámbito de participación económica y oportunidades. (Global Gender Gap Report, 2015)

México, lo que es y lo que falta

Como se mencionó, en lo que respecta a México se tiene un avance positivo a partir de la adopción de la cuota de género 50/50 con la modificación a la legislación electoral por la cual se adoptó la paridad a razón de la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de que se obligó a los partidos a integrar la fórmula de candidatos con personas del mismo sexo.

No obstante, aun cuando hayan aumentado los números de curules en las legislaturas federal y locales y en la asamblea legislativa del Distrito Federal, no se pueden dar por satisfechas todas las demandas de igualdad de género, pues esto solo es un paso en la participación política femenina.

Refiriendo al caso de las legisladoras, se tiene que en México a partir de 2015 mejoraron estadísticamente, sin embargo, aún falta trabajar en el liderazgo de las mismas al interior de los congresos y sobre la capacidad de incidir en la agenda política en asuntos que benefician al género femenino y a otros aspectos sobre los que los varones no tenían la visión o el interés.

Y es que las comisiones del Congreso de la Unión, la mayoría son presididas por hombres. Así como también se percibe una segregación por temas, pues en las comisiones cuyo tópico se ha relacionado tradicionalmente como propio de los hombres, están integradas en su mayoría por diputados y aquellas cuya temática tradicionalmente se liga a lo femenino, se integran mayormente por diputadas. Es de destacar en la actual LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la Comisión de Equidad de Género que solo cuenta con la visión de un hombre en un total de 26 integrantes, lo que implica que las cuestiones que atañen a hombres y mujeres y sobre lo que se deben crear leyes y acciones para combatir la desigualdad de género no ha sido comprendido por los encargados de formular las leyes.

Asimismo en el liderazgo al interior del Congreso de la Unión, no se aprecia la equidad de género, pues de las 56 comisiones ordinarias que se tienen en la actual Legislatura, sólo 16 son presididas por mujeres.

Además teniendo en cuenta que *la desigualdad de género y sus mecanismos de reproducción no son estáticos ni inmutables, sino que se modifican históricamente en función de la capacidad de las mujeres para articularse como un sujeto colectivo y para persuadir a la sociedad de la justicia de sus vindicaciones políticas*, (Cobo, 2005:254) es necesario un constante repensar de las políticas tendentes a lograr la igualdad entre los géneros, las interacciones entre mujeres y hombres y en general, la estructura estatal, pues ésta en gran medida es discriminatoria.

Por ello, cuando se ha avanzado en algunos aspectos, aún quedan ejes pendientes, candados por abrir, ejemplo de ello se tiene cuando las mujeres se posicionan en liderazgos empresariales, pero su trabajo es más duro, pues a menudo ellas están sobrecualificadas, les llevó más tiempo y más trabajo llegar hasta ese puesto que lo que le cuesta a un hombre y tiene realiza más trabajo en casa.

También es preciso analizar el trabajo que las legisladoras realicen, pues uno de los objetivos de las cuotas de género y de la democracia paritaria lo representan las repercusiones que en la agenda tengan esos grupos representados, y se presta esa especial atención a la participación femenina en el ámbito público, no sólo porque esto le da legitimidad al estado democrático, sino porque es imprescindible su opinión en el espacio político, la acciones que se promuevan en beneficio de la población, pero también las acciones que se propongan para mejorar la situación de las mujeres. Por ello se expresa:

“Lo importante no es sólo que las mujeres estén en el espacio público, sino lo que dicen en él. Por eso es imprescindible la construcción de un espacio político feminista. Si las mujeres no se apropian de la mitad de los recursos políticos las sociedades occidentales no serán nunca plenamente democráticas.” (Cobo, 1999: 64)

En razón de la exclusión de las mujeres de los espacios políticos, Cobo menciona:

“Los poderes fácticos, el poder político y, en general, todos los poderes de decisión son casi impermeables a las mujeres. El poder político es masculino y patriarcal. Masculino, porque alrededor del 90% de los individuos que están al frente de todas las instituciones son varones. Y patriarcal, porque ese 90% de varones toma

decisiones políticas e impone normas en el marco de un sistema de dominación patriarcal, que consagra su hegemonía sobre las mujeres.” (Cobo, 1999: 60)

Tomando en cuenta estas aseveraciones, se precisa la adopción de cuotas y la sensibilización en género en todos los espacios de gobierno que permanecen masculinizados, pues la presencia de mujeres sigue siendo baja en las presidencias municipales y en los ejecutivos del no solo en cuanto a titulares de los mismos, sino en la integración de toda la administración

De igual forma es necesario tomar en cuenta la distribución de roles en los hogares, pues ha de comprenderse que el ámbito privado está indisolublemente ligado al público y deben replantearse también los roles y los tiempos que cada miembro del hogar le dedica a este, pues las obligaciones en este ámbito recaen en mayor medida en las mujeres y ellas le dedican más horas al trabajo de cuidados y tareas del hogar que los hombres. Esto se revelado por diversas encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (véase Encuesta Nacional del Uso del Tiempo ENUT, Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social ELCOS, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH).

Para equilibrar este tipo de trabajo, es menester que tanto a mujeres como a hombres se brinden prestaciones consistentes en servicio de guarderías y licencias por maternidad y por paternidad. Aparte de la sensibilización social sobre el aporte que las mujeres han hecho a la economía al encargarse de las actividades del hogar.

Fuentes consultadas

Cobo Bedía, Rosa. 2005. “El género en las Ciencias Sociales”, Cuadernos de Trabajo Social, vol. 18, Madrid: Universidad de A. Coruña, p.p. 249-258.

Cobo Bedía, Rosa. 1990. Multiculturalismo, democracia paritaria y participación política. Política y Sociedad No. 32. Madrid: Universidad A. Coruña, p.p. 53-65.

Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará", Adoptada en Belém do Pará, Brasil, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, 9 de junio de 1994.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), ONU, Nueva York, EUA, Adoptada el 18 de diciembre de 1979.

Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social. 2012. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 2011. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo. 2014. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Global Gender Gap Report 2015, Table 3, Global rankings, World Economic Forum, Switzerland, 2015.

Informe Global de la Brecha de Género 2015, Foro Económico Mundial, 2015.

Las mujeres en el parlamento en 2015, perspectiva anual, Unión Interparlamentaria, Suiza, 2016.

Las mujeres y la democracia. Democracia. Naciones Unidas. ONU. Recuperado de: www.un.org/es/globalissues/democracy/women.shtml.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Texto vigente. Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión.

LXIII Legislatura. Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Comisiones ordinarias. Recuperado de: http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/003_comisiones.

Mujeres en la política: 2014, Unión Interparlamentaria. Recuperado de: http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_sp.pdf.

Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria, ONU Mujeres, Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Panamá, 2015.

ONU Mujeres. 2014. Empoderamiento Político de las Mujeres: marco para una acción estratégica, 2014-2017. Panamá: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

Santín del Río, Leticia. “En el camino de la democracia paritaria”. En Ackerman, J. (Coord.). 2011. *Elecciones 2012: en busca de Equidad y legalidad*, Universidad Nacional Autónoma de México. México: Universidad Nacional Autónoma de México .